

## II. ANÁLISIS POLÍTICO

### EL CONTEXTO DE NUESTRA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA: INGOBERNABILIDAD, PLURALIDAD Y TOLERANCIA

Leonardo Méndez Sánchez

*Hermanos:  
Bueno...bueno...  
probando... probando... probando...  
un... dos... tres... cuatro...  
bueno... bueno... sí... bueno...  
probando... atención... probando...  
uno... dos... tres...  
probando...  
Subcomandante Insurgente Marcos*

Aun cuando los resultados de la elección federal del 6 de julio pertenecen, en rigor, al segundo semestre de 1997, carecería completamente de interés reflexionar en torno a los acontecimientos políticos del primer semestre, sin hacer referencia a éstos. Sobre todo porque una lectura constante del proceso electoral durante las campañas, fue precisamente la amenaza de ingobernabilidad que el grupo político en el poder, y algunos sectores de la sociedad que lo apoya, señalaron como consecuencia de la posibilidad de que la oposición controlara la próxima Legislatura. Este temor no se pudo generalizar, si pretendían provocar el voto del miedo, como tampoco lo lograron en 1994. Ni siquiera al interior del propio Partido Revolucionario Institucional (PRI) existió un consenso al respecto, e incluso se podría pensar que hubo grupos interesados en que el cambio se diera para señalar, posteriormente, la ineficiencia de la corriente tecnócrata dominante. En la iniciativa privada hubo quienes se manifestaron de manera muy semejante.

Las autoridades eclesiásticas invitaron al pueblo mexicano a pensar en las opciones políticas, pidieron un voto razonado y crítico que permitiera

seguir reconstruyendo el país, apuntando implícitamente que había partidos políticos que no lo permitirían. Los medios de comunicación televisivos, y algunos medios radiofónicos, así como editorialistas y articulistas de la prensa escrita, llegaron a identificar a un partido político, concretamente el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como un instigador de la violencia urbana, por medio de marchas y plantones, y lo acusaron de tener proyectos caducos y ser defensor del Estado populista y benefactor, responsable de los problemas económicos que padecemos.

Es evidente que la amenaza de ingobernabilidad no puede ser una categoría que permita analizar e interpretar los fenómenos políticos que se dieron en el tiempo que estamos revisando, pero sí puede ser un factor que permita abrir algunas líneas de explicación. Sobre todo si consideramos que detrás de la amenaza de ingobernabilidad se pretendió intimidar para inclinar la tendencia del voto al PRI. Por lo tanto, si el análisis que se realice indaga los motivos, elementos o causas, que de alguna manera fundamentan los privilegios de grupos políticos y económicos, se podría entender por qué recurrieron a la hipótesis de la ingobernabilidad para recuperar el voto popular.

Pero la ingobernabilidad no sólo fue una amenaza para inducir el voto.

El propio presidente Zedillo lo expresó reiteradamente, cuando indicó que el PRI debería conservar el control de la Cámara de Diputados para asegurar que se pudieran alcanzar los objetivos propuestos. El presidente del PRI, Humberto Roque Villanueva, con frecuencia amenazó al país con el anuncio de que vendrían graves descalabros sociales si su partido no conservaba el poder. Algunos miembros prominentes de la iniciativa privada hablaron de la fuga de capitales, y veladamente insinuaban que se podía repetir la crisis social, política y económica posteriores a diciembre de 1994.

Pero la misma noche del 6 de julio, cuando el presidente Zedillo felicita a Cuauhtémoc Cárdenas por haber ganado la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y le ofrece apoyar su gestión, así como las declaraciones posteriores que felicitan a los partidos de oposición por su participación en el proceso electoral, parecerían contradecir la amenaza anterior de ingobernabilidad. No hay tal contradicción. Mientras pudo influir en la votación actuó como militante del priismo, y aprovechó todos los espacios que tuvo a su alcance. Después sólo podía reconocer un hecho que aparece como

irrefutable: con todo y el voto cautivo, y a pesar de la presión y dirección del voto en las zonas rurales y semiurbanas, el PRI no alcanzó ni siquiera la mitad de las diputaciones federales, perdió dos gubernaturas, es cuestionado su triunfo en otras dos, y en el Distrito Federal no ganó uno solo de los distritos. Pero, sobre todo, perdió la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y deja en el centro del reflector político al partido opositor que se ha negado sistemáticamente a negociar con el poder y al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que representa la oposición a la política neoliberal de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

En este breve ensayo, se pretende analizar la situación política en la que ocurre la elección federal de julio, tratando de establecer un diagnóstico que permita anticipar el alcance de los triunfos de la oposición.

Posteriormente se analizan las relaciones entre ingobernabilidad y los procesos democráticos desde la perspectiva neoliberal dominante, tratando de especificar el pluralismo que los votantes decidimos en este cambio radical del panorama político.

## **1. Incertidumbre y desconfianza, elementos dominantes del contexto político actual**

Hay quienes sostienen que los partidos políticos no tienen respuestas a los diferentes problemas de la sociedad mexicana. Después del debate entre Cuauhtémoc Cárdenas y Alfredo del Mazo, hubo comentaristas políticos y programas de televisión que se encargaron de sostener que ninguno de los dos había hecho propuestas específicas de gobierno, y que sólo se habían dedicado a atacarse mutuamente. De hecho sí hubo propuestas de gobierno, en materia de seguridad, servicios, financiamiento, educación y cultura. ¿Por qué se perciben las cosas de manera diferente? Se podría pensar que se trata sólo de una falsa percepción, o de ofrecer abiertamente una falsa interpretación de los acontecimientos. Podría ser. Pero también se podría indagar, en el contexto político, por qué no ha sido posible lograr una adecuada difusión de los proyectos políticos que se ofrecen a la ciudadanía, ni en el caso del debate mencionado, ni en las campañas electorales de cada uno de los partidos políticos. Este contexto se puede leer de la siguiente manera.

*1.1.* Hay que pensar en el pasado autoritario del partido que ha gobernado el país por más de 65 años, que ha generado usos y costumbres que difícilmente podrán ser removidos sólo por la alternancia en el poder como resultado de un proceso electoral. Como parte de este pasado autoritario en el sexenio salinista se cedieron las gubernaturas al Partido Acción Nacional (PAN), producto de las llamadas “concertaciones”, pues más que ser el resultado de la voluntad popular, los gobiernos de oposición se dieron por la voluntad política del propio expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Dentro de la tradición autoritaria del PRI, se podría ubicar las amenazas y descalificaciones del propio presidente Zedillo durante las campañas electorales. Esto ha generado respuestas tajantes como las del dirigente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, que en una de las cartas dirigidas al presidente de la República, le pide serenarse ante el avance de los partidos de oposición. La actitud de los candidatos priístas al respecto es también ilustrativa, pues sostienen que el único que puede continuar con “lo logrado”, de no romper con la estabilidad del país, y de cambiar para mejorar (por paradójico que parezca, pues ellos pertenecen al partido que ha propiciado la situación existente) es el propio PRI.

*1.2.* A raíz de esta actitud autoritaria, se sostiene que precisamente por estas condiciones es difícil pensar que el régimen político mexicano pudiera ser transformado por la vía de los procesos electorales. De hecho, y debido a las condiciones materiales de la sociedad, sobre todo el desplazamiento de las clases medias, el empobrecimiento de la sociedad que parece imposible de detener, la anulación de un horizonte promisorio para millones de jóvenes en el país, las gravísimas dificultades para la operación de la planta productiva, se esperaba que en las elecciones federales de 1994 se pudiera gestar un cambio en la conducción del país, y nada ocurrió.

Ahora que existe la posibilidad de abrir nuevos espacios de participación para los partidos de oposición, como resultado de las elecciones federales de julio, la respuesta es simplemente la descalificación del oponente, o bien la amenaza de condiciones de vida peores a las que ya se tienen.

Para quienes creemos en la necesidad de que los partidos políticos se alternen en la conducción del país, lo menos que se vislumbra es la enorme carencia de una cultura política que haga posible este cambio, por lo cual éste será lento e imprevisible.



1.3. Hay un desajuste institucional al interior de la sociedad mexicana. La vieja búsqueda del bien común, por medio de la justicia social, se ha abandonado. Ahora la acción social tiene abiertamente la pretensión de dominio y manipulación de la sociedad mexicana. No es claro el principio de racionalización que mueve a las instituciones en México. El Ejército Mexicano, que había mantenido una imagen de apoyo y servicio al pueblo, se percibe ahora de manera diferente, producto de sus relaciones probadas con el narcotráfico, y las violaciones a los derechos de los civiles en las zonas de conflicto en nuestro país: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como la zona de las Huastecas. Esta actitud en Chiapas se encubre hoy bajo las características de la guerra psicológica, o de baja intensidad, que se aprovecha de la miseria y la incertidumbre, y busca la cooptación de las bases civiles de los neozapatistas, justamente para minar el ánimo, y provocar el abandono a los combatientes en el momento en que se decidiera una acción de exterminio, o simplemente para doblegarlos en las mesas de "diálogo". La jerarquía de la Iglesia Católica tampoco ha conseguido generar un clima de confianza y seguridad en torno a las acciones políticas; por el contrario, en diferentes declaraciones han apuntalado las declaraciones priístas en el país.

La educación formal o institucional se presentó, durante mucho tiempo, como una alternativa que le permitía a las nuevas generaciones movilidad y ascenso social, pero ahora ya nadie lo puede ofrecer como tal, no sólo a los egresados de las escuelas públicas, sino también a los que egresan de las instituciones privadas. El descrédito de las instituciones ha traído consigo la desconfianza, la certeza de que es muy difícil encontrar opciones de solución a la problemática social.

1.4. Dentro del actual contexto político, la variable más importante corresponde, sin lugar a dudas, a la política neoliberal vigente, y a su tendencia a resolverlo todo mediante planes y programas. Desde el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, se criticaba la elaboración de planes sin planificación. Esta tendencia se fortaleció en el sexenio de Carlos Salinas y continúa con el actual presidente. Como dato relevante, cabe mencionar que Ernesto Zedillo fue secretario de Programación y Presupuesto en el sexenio salinista, y que los planes que elaboró fueron equivocados. Quizás sea porque en América Latina el neoliberalismo se presenta como la solución a la desorganización de las diferentes economías, y se destaca, de ma-

nera relevante, su pretensión de planificar y elaborar estrategias, a pesar de que en más de una ocasión la realidad se ha encargado de contradecir los proyectos y sus estrategias. Ante esta tendencia planificadora es importante mencionar que en México las políticas institucionales han fracasado en la mayoría de los casos, por lo que se ha generado un clima de desconfianza ante planes y programas. Pero sobre todo, la tendencia neoconservadora del neoliberalismo mexicano ha pretendido –mediante la planeación que propone– estimular el desarrollo de la economía favoreciendo, primordialmente, a los dueños del capital, por encima de la clase trabajadora, y en perjuicio de las clases mayoritarias. Es curioso que en esta tendencia a planificar se habla de sacrificio, austeridad, disciplina, productividad, y hasta de progreso. En el corto plazo, es evidente que el capital se ha favorecido, pero en el mediano, los trabajadores siguen esperando. Por lo tanto, es evidente que estas políticas institucionales han resultado inadecuadas, costosas, e ineficientes.

1.5. En consecuencia, se puede pensar que la problemática económica representa el más alto riesgo para la sociedad, y las consecuencias negativas son más que evidentes. Esta crisis económica se agudizó en diciembre de 1994. Un alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo declaró, en una visita a la ciudad de México, en 1995, que ningún otro país, excepto México, podría realizar los ajustes económicos que provocaron tanto la política económica de Salinas, como la impericia política del presidente Zedillo. Hoy se dice que el empleo se recupera, que se está llegando al número que había en 1994, pero no se indica que, desde ese momento a la fecha, ha crecido la población económicamente activa, y que el número de mexicanos sin empleo y subempleados aumenta. El sector industrial ha denunciado la enorme diferencia entre el porcentaje en la devaluación del peso frente al dólar, y los índices oficiales de inflación. Además del proceso de pauperización de la sociedad mexicana, el problema económico ha repercutido severamente en su estructura, sobre todo en lo que se refiere a las normas y valores que vincula a los sujetos entre sí. Se habla mucho de una crisis de valores y objetivos personales, lo cual es cierto, pero habría que revisar cuidadosamente los efectos que ha tenido en la relación de los sujetos entre sí, y que ha generado desconfianza e inseguridad respecto al otro. Esto ha sido evidente en las campañas políticas, aunque se ha sostenido que es nece-

saría la apertura de espacios democráticos. Pero esta apertura debe acompañarse de tolerancia, uno de los valores que se está perdiendo, y que se manifiesta desde los discursos presidenciales, los dirigentes de los partidos políticos, e inclusive en los candidatos en campaña.

1.6. En el actual contexto político es frecuente escuchar la crítica manifestada a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato electo a la jefatura de gobierno, por su pasado priísta. Del otro lado se destaca la relación del PAN con Carlos Salinas de Gortari durante el proceso de consolidación en el sexenio pasado, e inclusive se han documentado las “concertaciones” por las que consiguieron algunas gubernaturas. Si bien no es justificable que los cuadros políticos más relevantes del momento, de alguna manera estén relacionados con el PRI, es explicable por la hegemonía de este partido en los últimos 70 años de la historia del país. Algunos de los errores de los partidos de oposición, como la falta de oficio político, o incluso, los errores en la relación con los medios, o al plantear a la ciudadanía planes y programas de acción, se deben a que estas fuerzas de oposición se han incorporado recientemente a la vida política nacional. Esto no quiere decir que todas las deficiencias tengan el mismo origen. También se puede objetar que el PAN tiene ya una larga historia como partido político, o que el PRD tiene su origen en fuerzas políticas que remontan su lucha a los años cincuenta, por lo menos, y que por tanto deberían tener ya cierta experiencia. Quizás el escenario propuesto pudiera estar equivocado, de cualquier manera habría que asumir, en el análisis político, que los partidos de oposición están empezando a adquirir experiencia en la práctica de gobernar, y ubicar sus posibles errores en este contexto.

1.7. Aquí hay que pensar en la sociedad civil, que en diferentes momentos de nuestra historia se ha manifestado como una fuerza política importante, como en los casos de los días posteriores al sismo de 1985 en el Distrito Federal, y las manifestaciones en enero de 1994 para detener la acción del ejército contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. Sin embargo, se puede hacer una doble lectura de la sociedad civil; desde una perspectiva positiva, se puede ver en ella una alternativa de organización que posibilita la participación del ciudadano común, opción que no le han ofrecido hasta el momento los partidos políticos. Puede ser

también la válvula de escape que evita la presión a los partidos políticos para que se reorganicen y respondan efectivamente a sus necesidades, recuperando a la vez el pleno sentido de la frase, ahora vacía, de que el poder tiene su razón de ser en el servicio a la sociedad. Por otro lado, la misma sociedad civil tiene que crecer y madurar, para que su acción sea producto de la percepción que se tenga de los problemas que busca prevenir y remediar, y no del impacto momentáneo de los acontecimientos. Así, en este momento, por ejemplo, estaría doblemente preocupada por lo que ocurre en las zonas de conflicto de Guerrero y Chiapas.

1.8. De lo anterior se desprende que es disfuncional la representación política de gobernantes, partidos y organizaciones civiles (organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil), pues hasta ahora no se ha logrado vincular al ciudadano con los programas, proyectos, alternativas y acciones que se ejecutan. Se podría objetar la afirmación de que las organizaciones civiles desarrollan una función política, puesto que desde su creación pretenden no ser identificadas como organizaciones políticas, pero lo cierto es que llevan a cabo actividades políticas, si se quiere no partidarias y, en ocasiones, sin cargar con los vicios y deficiencias de los partidos políticos. Habría que ahondar en las causas que provocan que el ciudadano no se vea representado en los programas y proyectos que se le ofrecen. En el debate entre los candidatos a jefe de gobierno del Distrito Federal del PRD y del PRI se presentaron diferentes propuestas, que como ya se mencionó fueron manipuladas, pero que también pasaron inadvertidas para muchas personas, esto es, fueron conceptos vacíos, ofertas que no refieren a las necesidades concretas, inmediatas, de las personas, ajenas a sus formas de expresión, lejos de lo que consideran como la solución a sus problemas.

1.9. En síntesis, en el contexto político encontramos desconfianza y descrédito a la acción política. La participación ciudadana es limitada, y existe una gran inseguridad por la eficacia de la participación personal. En consecuencia, es difícil romper el inmovilismo social y político. Es difícil volver a creer que los gobernantes nos representan, y, más todavía, que somos nosotros quienes deberíamos vernos beneficiados de sus acciones de gobierno.



1.10. De las condiciones anteriores se desprende que para la recuperación de un sentido de la política que permita la revinculación de los diferentes sectores y miembros de la sociedad, se requiere el establecimiento de por lo menos cuatro condiciones:

1. Se debe poner fin a la arbitrariedad y abuso del poder tanto de los medios de comunicación como de los propios gobernantes. Cuando los partidos de oposición le piden al presidente de la República que tome con serenidad la caída de su propio partido (lo cual no implica, necesariamente, que vaya a perder el control político de la próxima Legislatura, pues ahora quedan las alianzas con el PAN, que ya anunció Felipe Calderón en el noticiario Monitor, el 9 de julio, y con el Partido del Trabajo (PT)). El consejo que la oposición dio al presidente Zedillo, y que al parecer está asumiendo, es que facilite el tránsito a la democracia para que pase a la historia como el iniciador de la democracia en México. En el fondo, le están solicitando que cese el abuso del poder que la sociedad le ha conferido para tratar los asuntos públicos que nos son comunes, pero nunca para que desde el poder publicite y apoye a sus correligionarios. Como ciudadano tiene todos los derechos civiles y políticos que nuestra Constitución señala, pero como presidente de la República lo es de todos los mexicanos, no solamente de los militantes del PRI, y nada lo faculta a utilizar de manera partidista los bienes y recursos de la nación.

La manipulación de los medios de comunicación está presente en las actuales campañas políticas. El Instituto Federal Electoral (IFE) ha monitoreado el tiempo que se dedica a los partidos políticos, y ha indicado que en el caso del PAN, PRI y PRD han recibido más o menos el mismo tiempo en los canales de televisión y noticieros de radio que transmiten desde la capital de la República, no así en los estados que se inclinan abiertamente por el PRI. Pero el tratamiento es distinto; desde el despliegue de reporteros, cámaras y la posterior edición de la noticia se ha visto favorecido el PRI.

En números anteriores del *Análisis de la Realidad Mexicana* he comentado que ahora la intención del voto refleja la mercadotecnia que acompaña a las campañas políticas, más que la conciencia de los ciudadanos.

En esta campaña habrá que revisar esta hipótesis. La crítica que el PAN ha hecho contra el PRD y, concretamente contra Cuauhtémoc Cárdenas, apoyada por la información que les proporcionó el señor José Ma. Córdoba Montoya, exsecretario técnico de gabinetes de Carlos Salinas de Gortari, la

filtración de Bital y el posterior ataque del señor del Valle, y las denuncias de Alfredo del Mazo en diferentes momentos, han sido magnificadas y explotadas al máximo posible, pero no han tenido el efecto esperado. La gente que se inclinó por la candidatura del ingeniero Cárdenas no sólo no disminuyó, sino que aumentó conforme se incrementaron los ataques. Parece que los ciudadanos están hartos del abuso y la arbitrariedad, así como de la violencia en cualquiera de sus formas. Se debe parar, pues, la arbitrariedad de comunicadores sociales y agencias publicitarias que confunden la penetración de productos comerciales en el mercado, dirigidos al consumo, con la búsqueda de una posible concientización de programas y proyectos políticos.

2. Se debe reconocer los derechos laborales y políticos como derechos humanos, pues aunque están comprendidos dentro de las garantías individuales protegidas por la Constitución, es necesario abrir nuevos cauces legales que permitan una mejor protección. Pero no sería suficiente con reconocer los derechos políticos de los mexicanos, y abrir nuevas instancias para proteger a los ciudadanos de las decisiones del IFE y del Tribunal Federal Electoral, pues el cabal cumplimiento de los derechos políticos, así como el resto de los derechos humanos, supone cumplir dos tipos de requerimientos básicos: condiciones materiales, y condiciones culturales. Condiciones materiales mínimas para evitar la manipulación de la sociedad por los grupos políticos en el poder, y romper con la tendencia a negociar votos con alimentos, servicios de salud, públicos, etc. Pero también se habla de condiciones culturales que permitan romper la manipulación de los medios de comunicación, básicamente de la telecomunicación, y abrir espacios para tomar críticamente las decisiones que involucran al ciudadano en el espacio público.

3. El aspecto que aparece como más difícil de lograr es el que se refiere a la necesidad de generar la confianza en la eficacia de la acción política individual y colectiva, como alternativa para generar espacios democráticos en el país, que propicien la discusión de los problemas que nos aquejan, y nos permitan encontrar alternativas y soluciones. Pensar nuevamente en que la tolerancia y la justicia social deben ser los valores que permitan una nueva revinculación social.

4. Al pensar en la democracia como forma de vida se está pensando que la democracia se finca en los procesos electorales. Debe ser precisamente al revés, los procesos electorales deben ser la consecuencia de la democracia

como forma de vida de las sociedades. La democracia es básicamente una actitud, y se refleja en las diversas acciones cotidianas. En *Análisis de la Realidad Mexicana* anteriores he sostenido que la democracia supone la posibilidad de que la sociedad se autolimite, es decir, pueda establecer sus propias metas, objetivos, razones e ilusiones, mediante la gestación de espacios comunitarios que propicien la crítica y solución de problemáticas y alternativas. Los objetivos sociales deberán encontrar la manera de unir el progreso con la justicia social, el respeto al individuo con la solidaridad y subsidiariedad, el respeto a la autonomía de grupos y sectores con la búsqueda del bien común de las sociedades.

## 2. Gobernabilidad, ingobernabilidad y democracia

Como ya se mencionó, en los números anteriores del *Análisis de la Realidad Mexicana*, se ha venido desarrollando un concepto de democracia que implica la posibilidad de crear procesos electorales en los que los partidos puedan disputarse, en condiciones equitativas, los diferentes cargos de elección popular. Sin embargo, hemos reiterado que la democracia supone también la gestación de un espacio democrático, en donde la participación plural de la sociedad posibilite la construcción de horizontes normativos de la sociedad, haciendo de la democracia un valor que dé “sentido a la vida, a la actividad, a las preferencias, al sacrificio del individuo, y al contexto social”.<sup>1</sup>

Esto implica que la democracia rebasa el ejercicio de los procesos electorales, y que debemos seguir trabajando para que éste sea cada vez más justo y equitativo (ahora el PRI tiene asegurado el voto del campo, voto verde se le ha llamado, ¿lo tendría también si no indujera el voto a cambio de despensas, obra pública, procampo, créditos bancarios, y dejara de usar los colores de la bandera mexicana?, ¿seguiría siendo el partido mayoritario como lo llamó Humberto Roque Villanueva? Ésta es la justificación del señalamiento; si seguimos trabajando en la democracia como horizonte de vida, se tendría que avanzar en la búsqueda de procesos electorales justos, que coloquen a los partidos en el lugar que les corresponde.

---

<sup>1</sup> Cornelius Castoriadis. “La democracia como procedimiento y como régimen”, en *Vuelta*, No. 227, octubre de 1995, p. 23.

Pero hay que ubicar los alcances de la democracia, pues no es la llave mágica para solucionar todos los problemas que padece nuestra sociedad.

Las enormes diferencia sociales no son solamente consecuencia del autoritarismo de los gobernantes. Un gobernante puede ser elegido en los procesos más democráticos posibles, y propiciar en sus acciones de gobierno una mayor desigualdad social, amparado por las leyes y las instituciones sociales. El bienestar de la sociedad tampoco se propiciará por tener procesos electorales competidos, o por la simple alternancia en el poder. Estas ideas deberán seguirse trabajando para evitar que la gente espere solucionar todos los problemas sociales por el solo hecho de haber logrado la alternancia en los gobiernos. Hay límites estructurales (y sistémicos) que no se salvan con el simple ejercicio de la democracia.

Aunque parezca reiterativo, conviene recordar que apenas hemos iniciado el camino hacia la alternancia política, conviene señalar que las primeras gubernaturas ganadas por la oposición, y que fueron oficialmente reconocidas, ocurrieron apenas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Inicialmente sólo se le reconocieron triunfos al PAN por ser un partido afín al proyecto económico salinista, a pesar de los escándalos como el de la elección para gobernador en Tabasco, donde se probó que Roberto Madrado gastó en pesos el equivalente a 70 millones de dólares, y que el PRD fue marginado por el expresidente Salinas (este capital político fue explotado con éxito en las campañas electorales de 1997).

Uno de los puntos de partida de este ensayo refiere a la amenaza de ingobernabilidad con los que se pretendió provocar el “voto del miedo”, ahora no se nos recordó que la guerrilla zapatista declaraba la guerra al Ejército Mexicano y al presidente de la República (los zapatistas están atrincherados en las montañas, olvidados por los partidos políticos, por los organismos no gubernamentales, y por la sociedad civil mexicana, esperando que la COCOPA, y la CONAI encuentren la clave para establecer condiciones para un diálogo verdadero con el gobierno mexicano), ahora el miedo al que se refirió el presidente Zedillo y los priistas tenía que ver con la ingobernabilidad, pero ¿qué significa ingobernabilidad para la tecnocracia que nos gobierna?

Pareciera ociosa la pregunta, se dirá que el mismo presidente Zedillo reconoce ahora que el equilibrio de las fuerzas políticas cambió, los analistas políticos indicarán que en la Cámara de Diputados el PRI ya no tiene la



mayoría absoluta, aunque habría que esperar qué va a ocurrir en la Cámara de Senadores, y que seguramente será un obstáculo importante en la aprobación de leyes que pretendan modificar o mejorar la legislación del país, o en la misma aprobación del gasto público propuesto por el ejecutivo. De ocurrir esto, en el caso de que el presidente Zedillo no pudiera establecer alianzas con el PAN (que sigue pensando en el gradualismo) y con el PRD (que sostiene la necesidad de hacer cambios radicales en la política económica y social del régimen), habrá acciones y reacciones que pudieran traer consigo serios problemas a los actuales gobernantes del país. En consecuencia, lo que el presidente Zedillo llamó “ingobernabilidad” parece todavía una posibilidad, sostenida precisamente por los resultados del 6 de julio de 1997.

No es difícil caracterizar lo que sería la “ingobernabilidad” para los gobiernos tecnócratas, o neoliberales como se les ha llamado, y que en general asumen los códigos de conducta neoconservadores. Dentro de este proyecto la ingobernabilidad supone:

- a) El surgimiento de crecientes y desmesuradas demandas sociales, que olvidan que primero se debe crear la riqueza y luego repartirla.

Esta posición es defendida dentro y fuera del gobierno, y es una de las banderas favoritas de los críticos del “populismo”. En contra se sostiene que aun la poca o mucha riqueza que pudiera haber en el país debe repartirse equitativamente, y que nada asegura que fortaleciendo los grupos económicos más poderosos del país la siguiente etapa sería el repartir la riqueza producida. En esta primera característica llama la atención la simpleza con que se califican las demandas sociales, y el olvido de que cualquier acción social tendría que buscar el bien común, y no el beneficio de los grupos políticos (incluyendo los partidos políticos, que gastan enormes cantidades del erario en su organización y campañas políticas) y económicos (que siguen siendo beneficiarios vía los subsidios y los fondos que remedian sus errores económicos). Si los grupos marginados demandan apoyos y subsidios es populismo, si los recursos se dirigen hacia la iniciativa privada, es para activar la producción del país.

- b) La ingobernabilidad supone también la posibilidad de que algunos partidos políticos, concretamente el PRD, al acceder al gobierno, en el caso

concreto del Distrito Federal, y de algunos municipios del país, asumiera el proteccionismo del llamado estado benefactor. Sobre todo porque la protección no es precisamente para la inversión extranjera, o para los bancos reprivatizados, ni para los grandes partidos políticos, sino para los grupos marginados de la sociedad mexicana. Los críticos de los gobiernos benefactores señalan que el destinar recursos a la atención de las necesidades sociales trae como consecuencia el incremento de los procesos inflacionarios que tanto nos afectaron en el pasado. Llama la atención la focalización de este señalamiento, pues, por un lado, la crisis de diciembre de 1994 no fue precisamente por atender a las demandas sociales, pero sus efectos y el sacrificio impuesto sí fueron para los grupos sociales menos favorecidos. Por otro, habría que revisar el autoritarismo y la corrupción que caracterizó a los sexenios llamados benefactores y populistas, para ubicar el origen de los problemas. Sólo por ejemplificar, la fuga de capitales al final del sexenio del expresidente José López Portillo, no la provocaron ni las clases medias, ni los pobres del país. Pero sí fueron las clases medias las que perdieron en la crisis de las casas de bolsa durante el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid.

- c) Por último, uno de los grandes miedos, y que se ha señalado como el gran caldo de cultivo para la ingobernabilidad, es precisamente las movilizaciones sociales. Para los gobiernos que no basan su legitimidad en la satisfacción de las demandas sociales, que no se preocupan por la calificación que la gente pudiera darle a sus acciones de gobierno (pues ya la mercadotecnia se encargará de orientar las conciencias), que no consideran que al bien común se llega por la justicia social (sino incrementando la producción, por la vía del sacrificio de campesinos y obreros), y que no toman en cuenta que el voto del pueblo es una limitante para sus acciones de gobierno (poco más de 1 800 000 votos no facultan al jefe de gobierno del Distrito Federal para hacer lo que quiera en su gestión, esperando la adecuada conducción de la “política de comunicación social” en los medios). En síntesis, para los gobiernos que no piensan que sus objetivos deben ser precisamente el establecimiento de un sentido social para sus acciones, entendiendo por tal la posibilidad de generar nuevos vínculos normativos y axiológicos para las sociedades, que no buscan la emancipación de éstas, las movilizaciones sociales no son

oportunidades para entablar un diálogo o para valorar la eficacia de las acciones de gobierno. En los ciudadanos que se manifiestan mediante las movilizaciones partidistas o no partidistas, no se ve al otro que puede hablar y escuchar, que tiene derecho a reclamar y exigir, se dice que finalmente el origen de cualquier forma de autoridad está en el pueblo, y no en las cámaras o las instituciones, sino en los enemigos del progreso que bloquean y obstaculizan las actividades productivas de los ciudadanos ejemplares.

La ingobernabilidad, pues, puede reflejarse en la pérdida del control económico y político de las formas de gobierno.

Las nuevas pretensiones de validez del ejercicio gubernamental no se obtienen por las consecuencias prácticas del ejercicio de un gobierno, sino por las relaciones comunicativas, a través de los medios masivos de información (y en concreto la telecomunicación), y que aluden a los procesos de psicologización de las necesidades y deseos de los individuos. Lo vimos y lo vivimos en las anteriores campañas políticas en nuestro país.

### 3. Conclusiones

Se podría pensar que para los diputados y senadores recién electos, uno de los objetivos más importantes podría ser demostrar al país que es posible la autonomía del poder legislativo. Y en efecto, la posibilidad de un trabajo que verdaderamente pudiera ser de utilidad para la nación, supone necesariamente la autonomía del ejecutivo, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido y, por el contrario, en 1988 las alianzas del PAN con Carlos Salinas de Gortari modificaron las leyes electorales, y quemaron las boletas electorales, por ejemplo. Pensar en la autonomía, es importante, pero no lo es todo.

En mayo de 1996, Héctor Aguilar Camín escribió en *Nexos*, a propósito de la reforma electoral, que “Estamos ante el fracaso más reiterado y ostensible de la historia nacional: la imposibilidad de hacer coincidir las leyes con la realidad”.<sup>2</sup> En el contexto poselectoral que estamos viviendo, no es suficiente con pensar en la autonomía del poder legislativo, es necesario avanzar y tomar en cuenta esta vinculación que propone Aguilar Camín, y buscar la adecuación de las leyes con las necesidades de los diferentes gru-

---

<sup>2</sup> Héctor Aguilar Camín. “Cuadernos”, en *Nexos*, No. 221, mayo de 1996.

pos sociales. Esta coincidencia supone, por un lado, revisar la legislatura vigente para modificarla y ajustarla, cuando fuere necesario, y por otro, generar nuevas disposiciones legales que permitan alcanzar esta meta.

Se dice fácil, pero la tarea es verdaderamente complicada, tal como ya se explicó líneas atrás, no sólo porque ningún partido podrá tener mayoría absoluta para decidir sobre posibles cambios, sino porque entra en juego una preocupación mayor: ¿qué tipo de sociedad queremos? Y más todavía, ¿cuál será la estrategia que nos permita cambiar, sin que se provoque la temida ingobernabilidad?

Y aun cuando se reconozca la valiosa intervención del IFE para lograr un proceso electoral legal y legítimo, ahora enfrenta nuevos retos, por ejemplo, buscar otras fórmulas que permitan una representación más fiel de las tendencias del voto. Habría que discutir nuevamente el concepto de representación para que, por ejemplo, los diputados uninominales se eligieran tal como viene ocurriendo, esto es, por el número de votos entregado, pero quedan preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si la concurrencia a las urnas es superior al 70 %, y dos candidatos obtienen, uno el 26 % de los votos y el otro el 28 %? Se podría señalar que queda la opción de los diputados de representación proporcional, pero no resuelve el problema, pues se puede sostener que el candidato perdedor del ejemplo anterior podría tener más representación que los incluidos en la lista de plurinominales. De hecho, en esta relación de candidatos propuestos se incluye, en los primeros lugares, a políticos relevantes o a quienes se les quiere beneficiar, y no necesariamente a los mejores representantes de la ciudadanía. El IFE debe revisar, en consecuencia, el concepto de representación, y junto con los partidos políticos impulsar una legislación que resolviera esta cuestión.

Se tendría que discutir también el concepto de gobernabilidad. Estamos ciertamente ante el riesgo del inmovilismo político, producto de la pluralidad que empieza a vivir el país. Pero este problema no se va a resolver sólo con una nueva legislación, se requiere una nueva cultura política que permita a los partidos abandonar inercias y vicios. El PAN deberá valorar los riesgos del pragmatismo y gradualismo políticos, el PRD abandonar la tendencia de ser un partido opositor a ultranza; el PRI deberá aprender, si puede, a tener vida propia independiente del poder presidencial y del corporativismo (¿qué pensarán los empresarios libaneses que *donaron* más de cien millones de pesos a la campaña de Alfredo del Mazo?); el PT deberá



demostrar que tiene autonomía, que es una opción política, y deslindarse del PRI; el PVEM tendrá que ofrecer una verdadera opción política para el país, y dejar de sobrevivir por los votos de quienes están desencantados de partidos, políticos y política.

Se requiere, pues, una nueva cultura política. Las primeras manifestaciones después del proceso electoral no apuntan en este sentido. El combate a la corrupción no es un programa de gobierno. La descalificación de los políticos ecologistas a la política no puede ser sólo un lema de campaña, tiene un efecto permanente en el electorado. En este sentido es ilustrativa la entrevista a Carlos Castillo Peraza en el canal 40, el 15 de julio del presente, al analizar lo que ocurrió durante las campañas políticas del primer semestre de 1997. Consideró, entre otras cosas, que la inclinación de los votantes en el Distrito Federal es un paso atrás en el proceso de democratización, pues solamente se eligió al viejo PRI. Por lo tanto, sostiene, la esperanza de cambio en los capitalinos mira hacia atrás, no al futuro y, en rigor, no hay cambio sino retroceso. Considera que los capitalinos no tuvimos la audacia para seguir avanzando, que tuvimos temor, y por eso el futuro del país está en la provincia. Esta referencia no tiene otra intención que mostrar lo que debemos evitar al analizar los procesos políticos. Aquí insistimos en tesis ya viejas del Centro Tata Vasco: se debe otorgar dignidad ética a la política, y debemos recuperar el sentido vinculatorio del derecho positivo, y abandonar la tendencia a resaltar se dice su carácter prohibitivo.

En los tratados, se dice que la pluralidad genera la tolerancia, y la tolerancia es el valor que podría evitarnos la amenaza del clima de ingobernabilidad. Pero aquí hay que precisar que la pluralidad que vive el país, producto de avances notables en la democracia formal, es un hecho. Pero la tolerancia es un valor, rector de actitudes y actividades, que existirá en el momento en que la asumamos como el eje rector de nuestras vidas. La tarea parece compleja. También parecía difícil el cambio por la vía electoral, y vivimos ya un ambiente de pluralidad. Es tiempo, ahora, de gestar en los procesos políticos la tolerancia, valor supremo de los regímenes democráticos. De la democracia a la pluralidad, esperemos ahora que de la pluralidad lleguemos a la tolerancia.